

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO

(S-1151/15)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN

Título I

Principios Generales y resguardos institucionales

ARTÍCULO 1°.- Función principal. El Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 2°.- Independencia y autonomía funcional. El Ministerio Público de la Defensa goza de independencia y autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

ARTÍCULO 3°.- Autarquía financiera. El Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Nacional. En orden a ello, tendrá crédito presupuestario propio, el que será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.

ARTÍCULO 4°.- Organización funcional. El Ministerio Público de la Defensa se estructura jerárquicamente a fin de cumplimentar sus funciones específicas y para el diseño y ejecución de políticas sobre defensa pública y acceso a la justicia. La unidad de actuación no afectará la autonomía y especificidad propia del desempeño de los defensores públicos ni podrá perjudicar a los asistidos o defendidos. Las recomendaciones generales e instrucciones particulares que se dicten en el ámbito del servicio de defensa pública tendrán como finalidad asegurar su ejercicio efectivo y adecuado.

ARTÍCULO 5°.- Principios específicos. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa desarrollarán su actividad de acuerdo a los siguientes principios:

- a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de desempeño, cumplirán e instarán a hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes, las reglamentaciones, los protocolos de actuación y toda disposición para la protección y defensa de la persona, en especial, el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad o sujetas a discriminación estructural, el que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial.
- b) Interés predominante del asistido o defendido. Actuarán, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional, promoviendo la accesibilidad al servicio y procurando dar satisfacción prioritaria a las necesidades concretas del asistido o defendido.
- c) Intervención supletoria. Cesarán su participación cuando la persona asistida ejercite su derecho a designar un abogado particular o asuma su propia defensa, en los casos y en la forma que las leyes autorizan, salvo los supuestos de intervención por mandato legal o previsión del servicio de defensa pública.
- d) Reserva. Deberán guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento, cuidando de no afectar a terceros, y de conformidad con las previsiones específicas.
- e) Transparencia e información pública. Garantizarán la transparencia de su actividad, informarán mediante lenguaje sencillo y práctica desformalizada las disposiciones y criterios que orientan su actuación y los resultados de su gestión, preservando los diversos derechos que puedan encontrarse en juego. La información que resulte de interés público deberá ser accesible a través de la página de internet oficial.
- f) Gratuidad e intervención. Los servicios que presta el Ministerio Público de la Defensa son gratuitos para quienes se encuentren abarcados por las condiciones requeridas en la presente ley y su reglamentación.

El Ministerio Público de la Defensa establecerá los criterios objetivos y subjetivos de limitación de recursos económicos o vulnerabilidad que habiliten la provisión del servicio de defensa pública más allá de los casos en los que correspondiere su intervención obligada.

Los jueces dispondrán la percepción de honorarios por parte del Ministerio Público de la Defensa, si correspondiera en virtud de esta ley y demás normativas.

ARTÍCULO 6°.- Difusión de derechos y del modo de ejercitarlos. El Ministerio Público de la Defensa desarrollará programas y actividades permanentes sobre el acceso al derecho y a la justicia y establecerá mecanismos para su interacción efectiva con distintos sectores sociales, a cuyo efecto podrá participar organismos públicos y privados involucrados con la defensa y protección de derechos, mediante la colaboración interinstitucional y el trabajo en red.

ARTÍCULO 7°.- Relaciones con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Ministerio Público de la Defensa se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una Comisión Bicameral cuya composición y funciones fijará el Congreso Nacional. En oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias de dicho cuerpo legislativo, el Defensor General de la Nación le remitirá a la Comisión Bicameral un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia y problemática del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

El Ministerio Público de la Defensa será consultado en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.

Título II

Estructura del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Órganos del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 8°.- Integración y funciones. Integran el Ministerio Público de la Defensa:

- a) la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior, administra y gestiona la provisión del servicio de defensa pública, garantiza su prestación efectiva y adecuada, diseña y ejecuta sus políticas públicas. Es la sede de actuación del Defensor General de la Nación;

b) las Defensorías Públicas, Tutoría Pública y Curaduría Pública son responsables primarias de la representación y asistencia en casos ante diversos fueros e instancias;

c) el Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa es el órgano consultivo del Defensor General de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental. Remisión. Miembros del Ministerio Público de la Defensa. El Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, creado por la Ley N° 26.657 y su reglamentación en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tiene como función proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Los representantes del Ministerio Público de la Defensa que lo integren serán designados por el Defensor General de la Nación, en virtud de su especialidad.

Capítulo 2

Defensoría General de la Nación

ARTÍCULO 10.- Titularidad. Estructura. La Defensoría General de la Nación es dirigida por el Defensor General de la Nación e integrada por magistrados, funcionarios y empleados según sus diversos deberes funcionales.

La Defensoría General de la Nación se estructura de la siguiente manera:

- a) Una Oficina de Administración General y Financiera;
- b) Secretarías Generales de Superintendencia y Recursos Humanos; Capacitación y Jurisprudencia; Política Institucional; y Coordinación;
- c) una Asesoría Jurídica;
- d) una Auditoría y Control de Gestión;
- e) área de Comunicación Institucional;
- f) área de Prensa y Difusión;
- g) área Informática;
- h) áreas de Colaboración:
 - 1. cuerpo de peritos, consultores técnicos e investigadores;
 - 2. intérpretes lingüísticos;
 - 3. laboratorio;

4. programa de atención de problemáticas sociales y relaciones con la comunidad;
5. programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos;
6. otros programas y comisiones relacionados con temáticas vinculadas con sectores vulnerables, en especial detenidos; víctimas de violencia institucional; niños, niñas y adolescentes; migrantes; refugiados y solicitantes de refugio; género; derechos económicos, sociales y culturales; diversidad cultural; personas con discapacidad; adultos mayores; mecanismos alternativos de resolución de conflictos; trata de personas;
7. grupos de abordaje territorial para sectores sociales desaventajados;
8. bancos de datos sobre materias de incumbencia.

El Defensor General de la Nación podrá crear todo otro órgano que resulte necesario para el cumplimiento de los fines institucionales.

ARTÍCULO 11.-Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos. La Defensoría General de la Nación establecerá, conforme los requisitos que determine la reglamentación, un programa de asistencia técnica y patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, y que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo 3

Defensorías, Tutoría y Curaduría Pública

ARTÍCULO 12.-Titularidad. Estructura. Cada Defensoría Pública y unidades de Tutoría Pública y Curaduría Pública, tendrán un titular que será el superior jerárquico de los funcionarios y empleados a su cargo. Si en virtud de disposiciones legales, gestión de casos o cualquier otra situación resultare exigible establecer modelos de cobertura del servicio en base a unidades funcionales con una coordinación centralizada, o fuere recomendable la constitución de equipos de trabajo entre diversos magistrados, funcionarios o empleados de la defensa pública, la modalidad a adoptarse deberá asegurar el número de colaboradores con dependencia directa del titular de que se trate.

Capítulo 4

Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 13.-Conformación. El Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa está conformado por :

- a) un defensor público de la Defensoría General de la Nación elegido por el Defensor General de la Nación;
- b) un defensor público del interior del país con rango no inferior a juez de cámara elegido por sorteo público;
- c) un defensor público con actuación en la Ciudad de Buenos Aires con rango no inferior a juez de cámara elegido por sorteo público;
- d) un defensor público con rango no inferior a juez de primera instancia elegido por sorteo público;
- e) un Tutor o un Curador Público elegido por sorteo público;
- f) un representante de una Organización no Gubernamental con amplio reconocimiento en temas de administración de justicia y protección de derechos;
- g) un representante de un colegio público de abogados.

La duración en el cargo será de DOS (2) años. La reglamentación dispondrá lo pertinente sobre los aspectos de su funcionamiento y elección de miembros, que deberán sesionar al menos DOS (2) veces al año y en toda ocasión que fueran convocados por el Defensor General de la Nación, quien presidirá el Consejo.

ARTÍCULO 14.-Funciones específicas. El Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa tiene las siguientes funciones:

- a) asesorar al Defensor General de la Nación sobre el servicio de defensa pública y las necesidades de expansión;
- b) proponer vías de acción respecto a las recomendaciones generales del Defensor General de la Nación;
- c) evacuar las consultas que le realice el Defensor General de la Nación.

Título III

Prestación del servicio de Defensa Pública

Capítulo 1

Integración del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 15.-Integrantes. El Ministerio Público de la Defensa estará integrado por:

a) Magistrados:

1. Defensor General de la Nación;
2. Defensores Generales Adjuntos;
3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante las Cámaras de Casación;
4. Defensores Públicos de Coordinación;
5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo;
6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia;
7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país;

8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo y Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias;
9. Tutores y Curadores Públicos;
10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

b) Defensores Públicos Coadyuvantes;

c) otros Funcionarios y Empleados Administrativos y de Maestranza.

Capítulo 2

Deberes y garantías para la gestión de casos de la Defensa Pública

ARTÍCULO 16.-Deber esencial. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa deberán gestionar sus casos de manera eficiente, en forma permanente y continua, propendiendo a una defensa técnica efectiva y adecuada.

ARTÍCULO 17.-Autonomía e independencia técnica. Se garantizará la autonomía e independencia técnica de quien gestione casos de la defensa pública. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa procurarán canalizar las indicaciones del asistido o defendido en la búsqueda de la solución que más lo favorezca, actuando según sus criterios profesionales.

Deberá fundamentar las presentaciones judiciales que realice su asistido o defendido, salvo que fueren notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo hará saber.

No podrá obligar a sus asistidos o defendidos a la elección de alternativas o procedimientos que dependan de la voluntad de aquéllos.

ARTÍCULO 18.-Deber de observancia. Si un integrante del Ministerio Público de la Defensa actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas del superior, podrá dejar a salvo la opinión personal. Si la considerare contraria a la ley, pondrá en conocimiento del Defensor General de la Nación el criterio disidente mediante un informe fundado.

Si la instrucción objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Toda instrucción particular estará encaminada a asegurar la defensa pública efectiva y adecuada.

Si se tratare de recomendaciones generales, se explicitará que deberá siempre prevalecer, en el caso concreto, la solución que más favorezca al asistido o defendido.

ARTÍCULO 19.-Deber de asistencia o representación. Continuidad. Excusación y recusación. La asignación de un caso a un integrante de la Defensa Pública, torna obligatoria su gestión en él.

La obligación señalada sólo podrá quedar exceptuada por resolución de autoridad de superintendencia y conforme la reglamentación, en los siguientes casos:

- a) si se encontrare imposibilitado en forma física o psíquica de asumir la asistencia o representación;
- b) si se encontrare en una situación de violencia moral respecto de su representado, debiéndose entender como tal, todo conflicto de interés que comprometa o pudiera comprometer la integridad del defensor o impida el ejercicio de una Defensa Pública efectiva y adecuada;
- c) si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa justificada.

ARTÍCULO 20.-Confidencialidad. Trato reservado y frecuente. Deberá protegerse especialmente la confidencialidad e instarse el trato reservado y frecuente con el asistido o defendido, quien será informado sobre las contingencias de su proceso en un lenguaje que le resulte comprensible.

Los integrantes del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación o de las fuerzas de seguridad, garantizarán y favorecerán, en todo lugar y de manera efectiva, la comunicación privada entre la Defensa Pública y su asistido o defendido.

ARTÍCULO 21.-Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán estabilidad en su empleo mientras dure su buena conducta y hasta los SETENTA Y CINCO (75) años de edad.

Los magistrados que alcancen la edad indicada en el párrafo primero, quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de CINCO (5) años, y podrán ser reiteradas mediante el mismo procedimiento.

ARTÍCULO 22.-Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán las siguientes inmunidades:

- a) no podrán ser arrestados, excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito; en tales supuestos, se dará cuenta al Defensor General de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, con la información sumaria del hecho;
- b) estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;
- c) no podrán ser perturbados en el ejercicio de sus funciones; las denuncias que los miembros del Ministerio Público de la Defensa efectúen en tal sentido se sustanciarán ante el Defensor General de la Nación, el cual tendrá la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente y requerir las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones;
- d) no podrán ser condenados en costas en las causas que intervengan como tales.

ARTÍCULO 23.-Prohibiciones. Sin perjuicio de los diversos impedimentos que se prevén en los respectivos regímenes jurídicos de la administración de justicia, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa tienen especialmente prohibido:

- a) atender consultas como profesionales de derecho o dar asesoramiento en casos de contienda judicial actual o posible, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función;
- b) ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de su cónyuge o con quien se encontrare en unión convivencial, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal;

c) ejercer el comercio o actividad lucrativa o empleo público o privado, sin autorización previa del Defensor General de la Nación, salvo el ejercicio de la docencia universitaria o las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la práctica de éstas últimas no obstaculice el cumplimiento de su labor.

ARTÍCULO 24.-Deber de informar. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa tienen el deber de informar a la Defensoría General de la Nación los asuntos a su cargo, que por su trascendencia o complejidad, requieran su puesta en conocimiento o una asistencia especial, indicando eventualmente las dificultades y propuesta de soluciones que estimen adecuadas.

ARTÍCULO 25.-Declaración enunciativa. Los deberes y garantías contenidos en este capítulo no excluyen otros derivados de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que en su consecuencia se dicten, las normas y protocolos aprobados para el ámbito específico de cumplimiento de la función.

Capítulo 3

Designaciones

ARTÍCULO 26.-Designación del Defensor General de la Nación. El Defensor General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.

ARTÍCULO 27.-Designación de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa. Las designaciones de los Defensores Públicos, Tutores Públicos y Curadores Públicos previstos en esta ley, se efectuarán mediante concurso público de oposición y antecedentes del cual surgirá la terna de candidatos que el Defensor General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a un candidato, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Las designaciones de los Defensores de Coordinación, seleccionados entre los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, conforme las previsiones de esta ley, serán dispuestas mediante resolución fundada del Defensor General de la Nación y de acuerdo a la pertinente previsión presupuestaria.

ARTÍCULO 28.-Concurso público de oposición y antecedentes. La elaboración de la terna de Defensores Públicos Oficiales se hará mediante el correspondiente concurso público de oposición y antecedentes, en base al mérito personal y la capacidad profesional. El concurso de oposición y antecedentes será sustanciado ante un Jurado de Concurso convocado por el Defensor General de la Nación de conformidad a la reglamentación que se dicte al efecto.

ARTÍCULO 29.-Plazo. El concurso de oposición y antecedentes deberá ser convocado por el Defensor General de la Nación en un plazo no mayor a SESENTA (60) días de producida la vacante.

ARTÍCULO 30.-Integración del Jurado de Concurso. El Jurado de Concurso será presidido por el Defensor General de la Nación o por otro magistrado de la Defensa Pública de conformidad a la reglamentación que se dicte a tal efecto. El Tribunal estará integrado además por TRES (3) magistrados del Ministerio Público de la Defensa con rango no menor a juez de cámara y TRES (3) años de antigüedad en el cargo, y por un jurista invitado.

Si el cargo a cubrir fuera de magistrados con rango no superior a juez de primera instancia, un integrante del Jurado de Concurso debe tener esa jerarquía, y TRES (3) años de antigüedad en el cargo.

Los magistrados de la Defensa Pública que integren el Jurado de Concurso deberán haber accedido a sus cargos de magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso y serán seleccionados como jurados mediante un sorteo público.

Los juristas invitados de cada concurso serán elegidos por sorteo público de una lista de académicos o juristas de reconocida trayectoria, previamente confeccionada de acuerdo con la reglamentación que se dicte a tal efecto.

La composición del tribunal procurará garantizar la especialidad funcional, diversidad geográfica y de género de quienes lo integren.

ARTÍCULO 31.-Requisitos. Para ser Defensor General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con OCHO (8) años de ejercicio, y reunir los demás requisitos exigidos para ser senador nacional.

Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener TREINTA (30) años de edad y contar con SEIS (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual

término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos SEIS (6) años de antigüedad en el título de abogado. Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 8 y 9 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener VEINTICINCO (25) años de edad y contar con CUATRO (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos CUATRO (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener DOS (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de la provincias, con por lo menos DOS (2) años de antigüedad en el título de abogado. No podrá concursar para el cargo de magistrado del Ministerio Público de la Defensa quien haya sido removido de su cargo por juicio político o quien haya sido exonerado del empleo público.

ARTÍCULO 32.-Juramento. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación.

El Defensor General de la Nación prestará juramento ante el Presidente de la Nación. Los demás integrantes lo harán ante el Defensor General de la Nación, o ante el magistrado o funcionario que éste designe a tal efecto.

ARTÍCULO 33.-Traslados definitivos. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa podrán ser trasladados en forma definitiva, con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro distrito territorial que se encuentre vacante, siempre que el cargo a cubrir sea de la misma materia y grado que el cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a DOS (2) años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa al momento del traslado, que no se encuentre sometido a un proceso disciplinario y que no se haya dispuesto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo vacante.

ARTÍCULO 34.-Designación de los Defensores Públicos Coadyuvantes. Los Defensores Públicos Coadyuvantes serán designados por la Defensoría General de la Nación, que dictará la reglamentación que establecerá los requisitos de idoneidad para la designación y el ejercicio

de la función, sus derechos, obligaciones y la remuneración correspondiente.

Los Defensores Públicos Coadyuvantes actuarán bajo la supervisión de magistrados titulares de dependencias o de la Defensoría General de la Nación, según corresponda. De acuerdo a las categorías y especialidad que establezca la reglamentación, podrán intervenir en la gestión de casos de la Defensa Pública según la asignación que realice quien propuso su designación y ejercite su contralor.

En los casos de Defensores Coadyuvantes que actúen como colaboradores de los magistrados de la Defensa Pública, la propuesta de su designación y el contralor, dependerá del magistrado con el cual se desempeñen.

En los casos de Defensores Coadyuvantes que cumplimenten otras funciones en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, la propuesta de designación y su contralor dependerán del área pertinente de la Defensoría General de la Nación.

Título IV

Actuación funcional de los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Defensor General de la Nación

ARTÍCULO 35.-Funciones y atribuciones. El Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tiene los siguientes deberes y atribuciones:

- a) garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa instando todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa;
- b) impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional;
- c) ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las facultades del Ministerio Público de la Defensa, función que podrá ser delegada en los Defensores Generales Adjuntos;
- d) tomar intervención, por sí o por medio de un defensor público de la Defensoría General de la Nación, en aquellos casos en que la

muestra o reiteración de patrones de desconocimiento y violación de derechos y garantías trasciendan el caso individual, alcanzando impacto institucional;

e) diseñar y ejecutar políticas públicas para la protección de sectores en condición de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión de casos;

f) disponer mediante recomendaciones generales e instrucciones particulares a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales, las leyes y los reglamentos le confieran, con la finalidad de un mejor servicio y la garantía de una Defensa Pública efectiva y adecuada;

g) ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación del servicio; establecer una adecuada distribución del trabajo y supervisión del desempeño, mediante sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos como así también un sistema de turnos para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de Defensa Pública, y garantizar el contralor inmediato de toda detención o internación involuntaria;

h) disponer fundadamente la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del organismo, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran el Ministerio Público de la Defensa, si la relevancia o dificultad de los asuntos la hicieren aconsejable;

i) efectuar la propuesta en terna de magistrados del Ministerio Público de la Defensa regulada en esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de concursos;

j) asegurar, en todo proceso, la debida asistencia por la Defensa Pública de cada una de las partes con intereses diversos o contrapuestos, y designar tantos integrantes del Ministerio Público de la Defensa como lo exija la naturaleza del caso;

k) asegurar, en los procesos en que se encuentran comprometidos los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o de personas ligadas a procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos, la separación entre las funciones correspondientes a la intervención complementaria o principal conforme la normativa pertinente y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor público;

l) promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley si se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;

m) elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, si se tratara de reformas reglamentarias;

n) responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y los organismos internacionales;

o) coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación ante las diversas autoridades nacionales, provinciales, municipales, organismos internacionales y autoridades de otros países;

p) reglamentar la actuación de los Defensores Públicos Coadyuvantes conforme lo previsto en esta ley, se trate de integrantes del Ministerio Público de la Defensa o de abogados de la matrícula, atendiendo especialmente a una gestión eficaz del servicio, a la solución de conflictos de interés y a la sobrecarga de trabajo;

q) imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;

r) organizar y reglamentar el Organigrama General de la Defensoría General de la Nación, estableciendo las misiones y funciones de sus diversas áreas;

s) disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;

t) convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta a la que asistirán todos los magistrados, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige la presente ley y se procurará la homogenización de criterios sobre la

actuación del Ministerio Público de la Defensa, tratándose todas las cuestiones que el Defensor General de la Nación incluya en la convocatoria;

u) fijar la sede y el ámbito territorial de actuación de las dependencias del Ministerio Público de la Defensa, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;

v) responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa y establecer mecanismos ágiles y eficaces para la atención del público;

w) aceptar, en representación del Ministerio Público de la Defensa, donaciones o legados de personas físicas o jurídicas, conforme establezca la reglamentación;

x) patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, por sí o por delegación en un magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica que regule ese accionar;

y) celebrar acuerdos de cooperación y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento institucional y formación permanente de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa;

z) ejercer la presidencia, representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental creado por la Ley N° 26.657, a través de la designación de una Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los principios, deberes y facultades previstos en dicha norma, y designar a los representantes del Ministerio Público de la Defensa, y al equipo de trabajo que corresponda para el correcto cumplimiento de las funciones asignadas ante el mencionado órgano;

aa) designar un representante de la Defensoría General de la Nación para integrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), de acuerdo a la previsión legal;

bb) asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional;

cc) brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley N° 26.827 y su reglamentación.

Capítulo 2

Defensores Públicos de la Defensoría General de la Nación

ARTÍCULO 36.-Defensores Generales Adjuntos. Función. Los Defensores Generales Adjuntos tienen por función:

- a) realizar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos casos que intervengan por decisión del Defensor General de la Nación;
- b) mantener informado al Defensor General de la Nación respecto de los casos en que intervengan;
- c) actuar por delegación del Defensor General de la Nación en ámbitos relacionados con su ejercicio funcional;
- d) sustituir al Defensor General de la Nación en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. La reglamentación sobre subrogancias establecerá el orden de intervención; a falta de designación, intervendrá quien tenga más antigüedad en el cargo;
- e) realizar el informe anual relativo al ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 37.-Funciones de los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación. Los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación, de acuerdo a sus responsabilidades y atribuciones, su especialidad y jerarquía, y por decisión del Defensor General de la Nación, tienen las siguientes funciones:

- a) dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema en los que intervengan el Defensor General de la Nación o los Defensores Generales Adjuntos;
- b) actuar en casos de interés institucional o litigio estratégico;
- c) subrogar a otros magistrados del Ministerio Público de la Defensa en la gestión de sus dependencias;
- d) integrar unidades para la gestión de casos y equipos de trabajo según las necesidades de la cobertura;

- e) participar de la actividad del gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el Defensor General de la Nación disponga encomendarles;
- f) realizar el informe anual relativo al ejercicio de sus funciones.

Capítulo 3

Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación

ARTÍCULO 38.-Funciones. Los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación ejercerán la defensa de los asistidos o defendidos en tal instancia, efectivizando el derecho al recurso de acuerdo a los intereses de éstos. Petitionarán la reunión de las Cámaras de Casación en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, de conformidad con los intereses de sus asistidos o defendidos. Deberán mantener un fluido contacto con los defensores públicos que intervienen en otras instancias, en especial con los defensores de coordinación, para la mejor gestión de los casos e intereses de asistidos y representados y realizar los informes relativos a su función que fueren solicitados por la Defensoría General de la Nación.

Capítulo 4

Defensores Públicos de Coordinación

ARTÍCULO 39.-Designación. Los Defensores Públicos de Coordinación serán designados por decisión fundada del Defensor General de la Nación, de una terna propuesta por los Defensores Públicos Oficiales de cada distrito o ámbito funcional. A esos fines, se considerarán especialmente los antecedentes profesionales y experiencia en defensa y gestión.

Durarán UN (1) años en el ejercicio de la función y podrán ser reelegidos. Procederá la remoción antes del término indicado por inconducta manifiesta, deficiente desempeño de la función asignada o inobservancia de los principios y postulados enunciados en la presente ley y en sus resoluciones reglamentarias. El Defensor Público de Coordinación podrá renunciar a esta asignación por causales que a juicio del Defensor General de la Nación resulten atendibles y no perjudiquen al servicio.

ARTÍCULO 40.-Funciones. Los Defensores Públicos de Coordinación tienen, en el ámbito de actuación asignado, los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los que surgen de la naturaleza del cargo:

- a) coordinar y supervisar a los Defensores Públicos Oficiales y Coadyuvantes y distribuir las tareas de modo objetivo y equitativo en orden al mejor desenvolvimiento del servicio;
- b) aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el Defensor General de la Nación, los sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos y un sistema de turnos para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de Defensa Pública, garantizando el contralor de la detención en sede policial;
- c) continuaren la gestión de casos que les corresponda en su rol de defensores públicos oficiales, salvo que la carga de trabajo, naturaleza y coyuntura de la cobertura del servicio, realidad territorial y demás circunstancias, hicieran aconsejable que el Defensor General de la Nación los exima temporariamente de aquellas funciones;
- d) asegurar la prestación adecuada del servicio en los casos penales cuando el fiscal, previo a la formalización de la investigación, comunica al imputado que lo está investigando y le hace conocer los derechos que le asisten;
- e) asegurar la prestación adecuada del servicio en la etapa de ejecución de la pena, resguardando la fluida relación entre los Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y los Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena a fin de garantizar una protección integral de los derechos de los defendidos;
- f) ejercer, de conformidad con la reglamentación vigente, la superintendencia de los magistrados, funcionarios y empleados que se encuentren bajo su dependencia;
- g) dirigir y supervisar a los diversos órganos de apoyo que se desempeñen en su ámbito de actuación;
- h) promover y ejecutar los cursos de acción necesarios para garantizar en forma permanente y continua la supervisión de la prestación del servicio de Defensa Pública en su distrito o ámbito funcional;
- i) tramitar los reclamos referentes a la prestación del servicio y la atención a los requirentes;
- j) designar Defensores Públicos Oficiales responsables por áreas, si fuere necesario;

- k) interactuar con los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación en la elaboración de líneas de litigio estratégico;
- l) intervenir en la gestión de aquellos casos en los cuales se estime conveniente; sea en función de su relevancia, interés institucional o social o por disposición del Defensor General de la Nación, de manera individual o conjunta con otros Defensores Públicos Oficiales;
- m) realizar informes periódicos de su gestión, responder a solicitudes de la Defensoría General de la Nación sobre la prestación del servicio en su ámbito de coordinación y producir estadísticas específicas sobre la labor desarrollada.

Los Defensores Públicos Oficiales de Coordinación con actuación en el interior del país, además de las funciones encomendadas, organizan los equipos técnicos de apoyo, la capacitación y la comunicación institucional.

Capítulo 5

Defensores Públicos Oficiales

ARTÍCULO 41.-Funciones. Los Defensores Públicos Oficiales son los magistrados del Ministerio Público de la Defensa que llevan la gestión de casos ante los fueros asignados en virtud de cada rol funcional y brindan asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e instancias, conforme los requisitos y según la materia que se trate.

ARTÍCULO 42.-Deberes y atribuciones. Los Defensores Públicos Oficiales, en las instancias y fueros en los que actúan, tendrán los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza del cargo:

- a) ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos;
- b) ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizarlas medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias, conforme lo previsto por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación. La asistencia a las personas que lo requieran deberá iniciarse desde que se encuentran detenidas en sedes policiales o de otros organismos de seguridad y hasta la conclusión de la etapa de ejecución de la pena;

- c) ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo;
- d) intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos, con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos, materias y fueros que corresponda. En su caso, presentarán a los jueces los acuerdos alcanzados para su homologación;
- e) arbitrar los medios para hallar al demandado ausente. Su intervención cesa cuando se le hace saber la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- f) contestar las consultas formuladas por personas con recursos limitados para afrontar los gastos del proceso o en situación de vulnerabilidad y asistirles en los trámites pertinentes y dar respuesta a las consultas en materia penal efectuadas por cualquier persona que requiera la asistencia de un defensor público;
- g) intervenir en todo acto procesal del cual pueda derivarse un beneficio o perjuicio para sus asistidos o defendidos. En el marco del proceso penal deberán estar presentes en cada ocasión en la que se cite al imputado;
- h) responder los pedidos de informes que le formulan el Defensor General de la Nación y el Defensor Público de Coordinación;
- i) convocar personas a su despacho cuando sea necesario para el desempeño de su ministerio;
- j) solicitar a los Registros u Oficinas Públicas o Privadas, sin cargo alguno, testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión;
- k) realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad;
- l) intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación;
- m) requerir a los fines de su gestión y más allá de las funciones de los organismos de apoyo del Ministerio Público de la Defensa, la actuación de los cuerpos periciales del Poder Judicial y la colaboración de las fuerzas de seguridad y de otras Instituciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- n) desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren, para la optimización de la prestación del servicio;
- o) promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;
- p) promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo;
- q) actuar mediante carta poder del patrocinado para presentaciones administrativas y judiciales en caso de imposibilidad de asistencia del mismo a la sede del tribunal;
- r) ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial, de conformidad con la normativa establecida al efecto;
- s) actuar en coordinación con la Defensoría General de la Nación en la representación de intereses colectivos o difusos;
- t) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos.

Capítulo 6

Defensores Públicos de Menores e Incapaces

ARTÍCULO 43.-Defensores Públicos de Menores e Incapaces. Funciones para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y personas respecto de quienes haya recaído sentencia en el marco de un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias. En el supuesto en el que se encuentren comprometidos los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o de personas respecto de quienes haya recaídos en sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en los que actúan, tienen los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza del cargo:

- a) intervenir en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;

- b) intervenir en forma complementaria en todo asunto judicial que afecte los derechos, intereses o bienes de niños, niñas y adolescentes, o de personas respecto de quienes haya recaído sentencia en el marco de un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;
- c) promover o intervenir en forma principal cuando los derechos o intereses de sus asistidos estén comprometidos y existiera inacción de sus representantes; cuando el objeto del proceso sea exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes o apoyos; y cuando carecieren de representante o apoyo y fuera necesario proveer la representación o el sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de su capacidad jurídica;
- d) intervenir en el ámbito extrajudicial ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes, cuando estén comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales;
- e) intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, según las circunstancias específicas del caso;
- f) ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral. Deberán intervenir en todo acto procesal del cual pueda derivarse un beneficio o perjuicio para sus defendidos y estar presentes en cada ocasión en que estos fueren citados;
- g) actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; en particular en cuanto al derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a mantenerlos informados de los asuntos inherentes a su intervención, en función del grado de evolución de sus facultades, teniendo en cuenta el progresivo reconocimiento de la capacidad.
- h) actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad; en particular al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, a la implementación de los ajustes que sean necesarios para asegurar su participación en el procedimiento, y a la no discriminación.
- i) postular una visión de la defensa o asistencia que tome en consideración la perspectiva de género y la atención a la diversidad cultural;

- j) concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados sus asistidos, controlando que sus derechos e intereses sean respetados y efectuar, en su caso, las acciones que fueren pertinentes;
- k) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos;
- l) convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;
- m) responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.

Capítulo 7

Tutores y Curadores Públicos

ARTÍCULO 44.-Intervención de Tutores Públicos. Los Tutores Públicos actuarán para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de los demás casos propios de la naturaleza del cargo y los que les encomienden el Defensor General de la Nación, en los siguientes supuestos:

- a) cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental;
- b) cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña o adolescente y sus representantes, u oposición de intereses entre diversos niños, niñas y adolescentes que poseen el mismo representante legal; con las salvedades que disponga la ley respecto de la actuación por sí de la persona menor de edad;
- c) cuando los padres o tutores del niño, niña o adolescente no pudieran ejercer actos de administración sobre uno o más bienes de éstos;
- d) hasta el discernimiento judicial de la tutela en casos de urgencia.

ARTÍCULO 45.-Función de los Tutores Públicos. En el ejercicio de sus funciones, los Tutores Públicos deberán: a) adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes; en particular en cuanto a su derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a poner en su conocimiento las garantías procesales que pueden ejercitar y orientarlos para que logren hacerlas efectivas; a mantenerlos informados sobre los asuntos inherentes a la tutela, en función de la edad y grado de

madurez suficiente, a la procura de su mejor interés y al principio de autonomía progresiva;

b) promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;

c) proceder de oficio, judicial y extrajudicialmente en la defensa de los derechos e intereses de sus asistidos, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la reglamentación pertinente;

d) concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados los niños, niñas y adolescentes asistidos;

e) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus asistidos;

f) convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;

g) responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.

ARTÍCULO 46.- Curadores Públicos. Los Curadores Públicos actuarán en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica, cuando no existieran bienes suficientes que permitan la designación a cargo económicamente de la persona involucrada o de quien, presumiblemente, debiera asumir las costas; o en ausencia de familiar o referente comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función.

Tendrán los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza de su cargo y aquellos que le encomiende el Defensor General de la Nación:

a) ejercer la defensa técnica en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de la implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en orden a garantizar los derechos de igualdad y no discriminación, el derecho a ser oído y debidamente informado, a participar en el proceso, incluso mediante los ajustes de procedimiento que puedan requerirse, en respeto a la autonomía y reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. En el ejercicio de la función, deberá tener en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

b) ejercer la función de representación que se disponga en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica, con relación a los

actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

c) ejercer la función de apoyo que se disponga en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

d) ejercer la función de apoyo que se establezca por decisiones no jurisdiccionales, siempre que así fuera dispuesto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las particularidades específicas de cada caso y los niveles de cobertura de la prestación del servicio;

e) instar la revisión judicial de las sentencias dictadas en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en un plazo no superior a TRES (3) años desde que fue dictada o en un término menor si ello fuere pertinente;

f) adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad; en particular al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, al derecho a participar en el proceso, incluso mediante los ajustes de procedimiento que sean necesarios, y a la no discriminación;

g) promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;

h) proceder de oficio, en el ámbito judicial y extrajudicial en la defensa de los derechos e intereses de sus asistidos, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la reglamentación pertinente;

i) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus asistidos;

j) concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojadas las personas asistidas;

k) convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;

l) responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.

Título V

Defensa de las personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental

ARTÍCULO 47.- Personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que determine el Defensor General de la Nación deberán ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica y la que surge de la naturaleza de la función. Tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental;
- b) ejercer la función conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos a los niños, niñas y adolescentes, o las personas con discapacidad, si así correspondiere;
- c) respetar, en el ejercicio de la defensa, la autonomía personal, la voluntad, los deseos y preferencias de la persona internada en forma involuntaria por motivos de salud mental y realizar presentaciones judiciales o extrajudiciales, pudiendo, entre otras tareas, oponerse a la internación, solicitar la externación, requerir mejoras en las condiciones de internación y tratamiento y acceder a las actuaciones judiciales en todo momento;
- d) en aquellas situaciones en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada, se deberá procurar que las condiciones generales de la internación respeten las garantías mínimas exigidas por la legislación específica de salud mental, así como las directivas anticipadas que pudieran existir;
- e) mantener contacto con la persona asistida en cualquier momento, en los establecimientos públicos y privados donde se desarrolla su internación, por sí o a través de integrantes del Ministerio Público de la Defensa, manteniendo entrevistas en ámbitos de confidencialidad y privacidad;
- f) ingresar a los establecimientos públicos y privados donde se desarrollen las internaciones, sin necesidad de autorización previa por parte de los efectores de salud ni de ninguna otra autoridad, incluido el acceso a toda documentación relativa a la persona defendida que obre en poder de las instituciones;

- g) brindar información a sus asistidos respecto de su función, datos personales y el estado del proceso;
- h) contar con el apoyo del equipo interdisciplinario necesario para brindar defensa técnica especializada;
- i) realizar los informes de gestión que les sean requeridos por la Defensoría General de la Nación.

Título VI

Remuneraciones y subrogancias de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 48.-Intangibilidad de las remuneraciones. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en virtud de la función que desempeñan y de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, gozan de intangibilidad en sus remuneraciones.

ARTÍCULO 49.-Remuneraciones. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se determinan del siguiente modo:

- a) el cargo establecido en el punto 1 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley recibirá la retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) el cargo establecido en el punto 2 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, percibirán un VEINTE POR CIENTO (20%) más de las remuneraciones que corresponden a los jueces de cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada CSJN N° 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional;
- c) los cargos establecidos en los puntos 3 y 4 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán la remuneración equivalente a juez de casación;
- d) los cargos establecidos en los puntos 5, 6 y 7 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán la remuneración equivalente a la de juez de cámara;
- e) los cargos establecidos en los puntos 8 y 9 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de primera instancia;

f) el cargo establecido en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, percibirá la remuneración equivalente a la de un secretario de cámara;

g) Los cargos establecidos en los incisos b) y c) del artículo 15 de la presente ley, percibirá la remuneración que corresponda al ejercicio de sus funciones, establecida en las leyes y reglamentación del servicio de defensa pública.

ARTÍCULO 50.-Equiparaciones. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa no podrán ser inferiores a la de los miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encontrándose equiparados en trato, escalafón y jerarquía. Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.

Capítulo 2

Régimen de subrogancias de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 51.-Reglamentación. Principios. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia de magistrados del Ministerio Público de la Defensa, se procurará el reemplazo por otro magistrado de este Ministerio. Si ello fuera desaconsejable o fuera necesario evitar conflictos de interés, se asignará un Defensor Público Coadyuvante para asegurar la eficiente prestación y cobertura del servicio de Defensa Pública.

Esta ley y la reglamentación específica del servicio de Defensa Pública establecen el orden de subrogancias de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, asegurando sus deberes y garantías.

Título VII

De los funcionarios y empleados

ARTÍCULO 52.-Designación. Los funcionarios, empleados administrativos y de maestranza del Ministerio Público de la Defensa serán designados por el Defensor General de la Nación, a propuesta de los respectivos Defensores Públicos. Gozarán de estabilidad en sus cargos y cumplirán las funciones que resulten necesarias para el normal funcionamiento y desarrollo del servicio conforme lo dispuesto por el Defensor General de la Nación y sus superiores jerárquicos. Todo ello, de acuerdo a lo dispuesto por la ley y la reglamentación correspondiente.

Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la

Nación, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.

ARTÍCULO 53.-Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa se integrarán en tres agrupamientos:

- a) técnico jurídico;
- b) técnico administrativo;
- c) servicios auxiliares.

Tales agrupamientos estarán divididos en categorías que constituyen los grados que pueden ir alcanzando los agentes durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación que se dicte al efecto.

Título VIII

Sistemas de control de gestión

ARTÍCULO 54.-Reglas de funcionamiento y control de gestión. El Defensor General de la Nación establece criterios generales y protocolos de actuación y asegura una defensa eficiente y adecuada. Implementa un sistema de gestión específico para el control y asignación ponderada o por turno de los casos y procura la mejora continua de los procesos de trabajo.

Debe evaluar la calidad de los servicios que presta el Ministerio Público de la Defensa, especialmente en cuanto a la observancia de la ley, el cumplimiento de los plazos y de las instrucciones generales que se hayan dictado.

Título IX

Régimen disciplinario

ARTÍCULO 55.-Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Defensor General de la Nación podrá imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) prevención;
- b) apercibimiento;

c) multa de hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %) de sus remuneraciones mensuales.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se registrará por la norma reglamentaria que dicte el Defensor General de la Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

ARTÍCULO 56.-Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público de la Defensa las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquel desempeña. Cuando la medida afecte al Defensor General de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

ARTÍCULO 57.-Mecanismos de remoción. El Defensor General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.

ARTÍCULO 58.-Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por SIETE(7) miembros:

a) TRES(3) vocales, que deberán cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados UNO (1) por el Poder Ejecutivo, UNO (1) por el Senado y UNO (1) por el Consejo Interuniversitario Nacional;

b) DOS (2) vocales, que deberán ser abogados de la matrícula federal y cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;

c) DOS (2) vocales, que deberán ser elegidos por sorteo público entre los Defensores Públicos Oficiales que tengan un rango no menor a Juez de Cámara y TRES (3) años de antigüedad en el cargo, uno entre quienes se desempeñan en el interior del país y uno entre quienes se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.

ARTÍCULO 59.-Convocatoria. Integración. El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el Defensor General de la Nación. En caso de que el Defensor General de la Nación hubiese desestimado la denuncia que haya dado lugar a una queja, la convocatoria será realizada por el presidente del Tribunal. Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán TRES (3) años en sus funciones contados a partir de su designación.

Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el Tribunal, hasta su finalización. Una vez integrado el Tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada SEIS (6) meses, según el orden del sorteo. Las funciones de acusar y defender serán ejercidas por magistrados del Ministerio Público de la Defensa conforme la reglamentación que se dicte a tal efecto.

ARTÍCULO 60.-Instancia. La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del Defensor General de la Nación de oficio o

por denuncia, fundadas en la invocación de las causales de remoción previstas en esta ley.

ARTÍCULO 61.-Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá ser presentada ante el Defensor General de la Nación, quién podrá darle curso conforme el artículo 59º desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. De la desestimación, el denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificado el rechazo. La queja deberá presentarse ante el Defensor General de la Nación, en su caso, quien deberá girarla dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su consideración.

ARTÍCULO 62.-Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicte el Defensor General de la Nación, que deberá respetar el debido proceso legal y defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:

- a) el juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no podrá constituirse en parte;
- b) la prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a este si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, en la que se deberá salvaguardar el derecho de defensa de las partes;
- c) durante el debate el acusador deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución si entendiera que corresponde;
- d) el Tribunal tiene un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles desde la recepción de las actuaciones para emitir sentencia;
- e) la sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor a QUINCE(15) días que fijará el presidente del Tribunal al cerrar el debate;
- f) según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al acusado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el acusado percibirá el SETENTA POR CIENTO (70%) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio; si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y

percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;

g) el Tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple pero en el caso de recaer sentencia condenatoria se exigirá el voto de CINCO (5) de sus integrantes;

h) la sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del Tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiere de la prueba o aquella ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;

i) la sentencia podrá ser recurrida por el acusador o el condenado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de TREINTA (30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las actuaciones a la Cámara mencionada, dentro de los CINCO (5) días de interpuesto.

Título X

Autarquía Financiera y Gestión Económica y Financiera

Capítulo 1

Administración

ARTÍCULO 63.-Administración. El Defensor General de la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto.

Capítulo 2

Autarquía Financiera

ARTÍCULO 64.-Autarquía financiera. A fin de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público de la Defensa contará con un presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro Nacional, y con recursos propios.

ARTÍCULO 65.-Recursos del Tesoro Nacional. Los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al SESENTA

CENTÉSIMOS POR CIENTO (0.60 %) de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. A dicha alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el Presupuesto General de la Administración Nacional, para el inciso 4º, bienes de uso, de acuerdo al presupuesto preparado por el Ministerio Público de la Defensa.

El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público de la Defensa de acuerdo al porcentaje establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a la presente ley.

ARTÍCULO 66.-Recursos propios. Constituyen recursos propios del Ministerio Público de la Defensa los siguientes:

- a) donaciones;
- b) aranceles, multas cuya aplicación tuviere a cargo y demás ingresos que se establezcan para financiar el Presupuesto de recursos y gastos del Ministerio Público de la Defensa;
- c) transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional u Organismos internacionales, en el marco de la implementación de políticas de colaboración a cargo de estos vinculadas a la actuación del Ministerio Público de la Defensa;
- d) toda renta que se obtenga por operaciones financieras e inversiones que se efectúen con los remanentes de recursos que no han sido aplicados a gastos;
- e) el producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Ministerio Público de la Defensa;
- f) los honorarios regulados por la actuación del Ministerio Público de la Defensa conforme se establece en la presente ley.

Los recursos enumerados estarán exentos de toda contribución o impuestos nacionales.

ARTÍCULO 67.-Elaboración del Presupuesto. La Defensoría General de la Nación elaborará anualmente, sobre la base de las pautas técnicas establecidas para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional y observando los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos, el Presupuesto general

de recursos y gastos del Ministerio Público de la Defensa para el año siguiente.

El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso de la Nación.

El Defensor General de la Nación está facultado a disponer las reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público de la Defensa, en el Presupuesto General de la Administración Nacional, a cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.

ARTÍCULO 68.- Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 9, 34 y 117 de la Ley N° 24.156.

El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público de la Defensa en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.

ARTÍCULO 69.- Nuevas estructuras y funciones. Todo aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público de la Defensa debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro Nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas las transferencias de nuevas funciones al Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo 3

Honorarios del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 70.- Honorarios. En todas las causas en que actúan los Defensores Públicos, los jueces regularán los honorarios por su actuación, de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y procuradores.

En las causas penales, el imputado que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un Defensor Público Oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes para ello. Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios se practicará un informe socio-

ambiental que deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si el imputado no tuviere medios suficientes para contratar a un abogado al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Para el caso que hubiera querellante particular, de resultar vencido en costas, se regularán honorarios por la actuación de un Defensor Público Oficial en defensa del imputado.

En las causas que versen sobre materia no penal, deberán cobrarse honorarios al vencido después de que los defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses, o cuando haya una mejora notable de la fortuna de éstos.

En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los DIEZ (10) días de notificado el fallo, el Tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Los honorarios que se devenguen y perciban por la actuación de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa constituyen recursos propios e ingresarán a una cuenta especial del organismo, destinada a la capacitación de sus agentes, al Fondo Especial de Asistencia Social del Asistido y Defendido, y a toda otra actividad dirigida al mejoramiento de las prestaciones del servicio, conforme se reglamente.

Título XI

Capacitación de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 71.-Capacitación.El Ministerio Público de la Defensa promueve la permanente capacitación de sus agentes a través de programas destinados a tal efecto. Cada uno de los agentes tiene derecho a recibir la capacitación establecida por el programa y el deber de cumplir con las actividades generales y específicas que se fijen. Se instará el funcionamiento de una escuela del servicio de justicia.

ARTÍCULO 72.-Empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público de la Defensa se implementará un régimen de carrera para la promoción y permanencia de los funcionarios y empleados, que se basará en la capacitación y la evaluación con estándares objetivos de la función, a través de la reglamentación que se dicte a tal efecto.

Título XII

Transformación de cargos de magistrados del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 73.- Transformación de cargos de Defensores Públicos. Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa modificarán su denominación de acuerdo a la siguiente manera:

- a) el Defensor General de la Nación, mantendrá su denominación, conforme a lo previsto en el punto 1 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;
- b) los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se denominarán conforme a lo previsto en el punto 2 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;
- c) los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación Penal, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial y los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se denominarán Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Casación, conforme el punto 3 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;
- d) los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial y los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se denominarán Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara de Casación, conforme el punto 3 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;
- e) los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;
- f) los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan

funciones en materia penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

g) los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

h) los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal económico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

i) los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal de Menores y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal de menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

j) los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en la etapa de ejecución de la pena en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

k) los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

l) los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal, se denominarán Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal, conforme el punto 6 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

m) los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 6 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

n) los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Capital Federal, se denominarán Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 7 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

o) los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras Federales del interior del país, los Defensores Públicos Oficiales de Primera y Segunda Instancia del interior del país y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en el interior del país, se denominarán Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país, conforme el punto 7 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

p) los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

q) los Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

r) los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámara de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia no penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantendrán su denominación conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

s) los Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

t) los Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

u) los Tutores y Curadores Públicos, mantendrán su denominación, conforme a lo previstos en el punto 9 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

v) los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de esta ley.

Los cargos de magistrados que resulten de las transformaciones previstas en el presente artículo gozarán los derechos adquiridos en razón de la estabilidad prevista en el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la pertinente creación de igual cantidad de defensorías públicas.

ARTÍCULO 74.-Magistrados Tutores y Curadores Públicos. Transformación. Los actuales Tutores y Curadores Públicos del Ministerio Público de la Defensa se transformarán en magistrados conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

Título XIII

Disposiciones transitorias y complementarias

ARTÍCULO 75.-Implementación progresiva. Cargos. La transformación de cargos del fuero penal nacional y federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y federal del interior del país, establecida en la presente ley, entrará en vigencia de manera progresiva en la medida en que lo disponga la ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, los magistrados del Ministerio Público de la Defensa, que se encuentren en distritos donde aún no se haya implementado la reforma establecida en la Ley N°27.063, mantendrán los cargos y ámbitos funcionales con sus pertinentes retribuciones establecidas en los artículos 4°, 12 y concordantes de la Ley N° 24.946 y leyes complementarias. De igual forma se registrarán por los requisitos de acceso a aquellos cargos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 24.946.

ARTÍCULO 76.-Creación de Defensorías en el fuero en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema acusatorio establecido en la ley N° 27.063, la necesaria igualdad de armas entre las partes del proceso y la falta de equiparación existente entre las actuales fiscalías y defensorías en la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los fueros Criminal, Correccional, de Menores y de Ejecución, créanse CINCUENTA Y CUATRO (54)Defensorías Públicas Oficiales de

Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SEIS (6) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y TRES (3) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 77.-Creación de cargos en el fuero en lo penal de la Ciudad de Buenos Aires. Créanse para cada una de las Defensorías mencionadas en el artículo anterior UN (1) cargo de Defensor Público Oficial de instancia única en lo Penal Nacional, en lo Penal de Menores o de Ejecución de la Pena según corresponda, UN (1) cargo de Secretario de Primera Instancia, UN (1) cargo de Prosecretario Administrativo, UN (1) cargo de Jefe de Despacho, UN (1) cargo de Oficial Mayor, UN (1) cargo de Oficial, UN (1) cargo de Escribiente Auxiliar y UN (1) cargo de Medio Oficial.

ARTÍCULO 78.-Creación de cargos en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. En la medida en que se lleve a cabo la implementación de la Ley Nº 27.063 en las distintas circunscripciones federales del país, deberá disponerse la pertinente creación de defensorías públicas oficiales, con la dotación de personal y partida presupuestaria correspondiente, a fin de equiparar su cantidad con las fiscalías existentes, y así garantizar la necesaria igualdad de armas entre las partes del proceso.

ARTÍCULO 79.-Creación de cargos. Funcionarios y Empleados. Créanse DOS (2) cargos de Secretario, DOS (2) cargos de Prosecretario Administrativo Relator, DOS(2) cargos de Escribiente y UN(1) cargo de Jefe de Despacho Relator con funciones de Secretario Privado para todas las Defensorías Públicas Nacionales y Federales de primera instancia de todo el país con competencia penal existentes hasta el momento de la aprobación de la presente ley.

ARTÍCULO 80.-Partidas Presupuestarias. Se otorgará el correspondiente crédito presupuestario para la creación de los órganos y cargos mencionados el que se imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa.

El Defensor General de la Nación solicitará las partidas presupuestarias pertinentes para la designación de los Defensores Públicos Oficiales de Coordinación según las necesidades de cobertura del sistema de Defensa Pública.

ARTÍCULO 81.-Obra Social. Todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, con idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas.

ARTÍCULO 82.- Implementación autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa se implementará a partir del ejercicio presupuestario que inicia el 1º de enero de 2016.

ARTÍCULO 83.-Derogación. Derógase la Ley N° 24.946 y sus modificatorias en lo pertinente al Ministerio Público de la Defensa y a las disposiciones referentes a sus integrantes, salvo lo expresamente dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75 de la presente. Derógase asimismo toda otra disposición contraria a esta ley.

ARTÍCULO 84.-Comuníquese al PODER EJECUTIVO.

Rodolfo J. Urtubey.- Pablo G. González.- Marcelo J. Fuentes.- Pedro G. Guastavino.- Sigrid E. Kunath.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Vengo a presentar un proyecto de ley cuyo objeto es regular la organización del Ministerio Público de la Defensa, en el marco de las reformas introducidas por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063.

El artículo 120 de la Constitución Nacional instituye al Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera de carácter bicéfalo; por un lado el Ministerio Público Fiscal y por otro el Ministerio Público de la Defensa. Esta decisión del Poder Constituyente ha colocado al organismo en un lugar distinto al de la justicia, dotándolo de las garantías adecuadas para ejercicio de la función asignada.

El modelo adoptado en el orden federal, en tanto instaura una defensa pública autónoma, constituye una garantía orgánica del derecho de defensa, reglamentaria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), que así la consagran, estructurada como una salvaguarda ineludible del acceso a la justicia y la protección de los sectores vulnerables.

Este diseño orgánico federal ha venido influyendo definitivamente en el derecho público provincial, que fue deslindando en la organización de su administración de justicia, la función del acusador público de la del defensor público, en tanto representan la antítesis procesal, evitando así la supervivencia de estructuras que debilitan ostensiblemente la protección de derechos.

El esquema de autonomía funcional de la Constitución Nacional se encuentra en consonancia con los estándares provenientes de los organismos internacionales. Así, mediante la Resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales”, aprobada durante el 41º período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”), se reconoció la fundamental actividad de la defensa pública oficial como herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Específicamente se resolvió “recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el “Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de fecha 31 de marzo de 2010, sostuvo entre las Observaciones finales respecto de Argentina, que el Estado parte debe garantizar la independencia presupuestaria y funcional de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado.

La Asamblea General de la OEA, mediante la Resolución AG/RES. 2714 (XLII-O/12) “Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” de junio de 2012, afirmó que “los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia”. Asimismo, allí se destacó “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita prestada por los Defensores Públicos Oficiales para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”, así como también ha destacado la necesidad de adoptar acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) “Hacia la autonomía de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”, que constituyó un nuevo logro en el campo de la defensa pública, por cuanto profundiza el compromiso de los Estados Miembros en pos de lograr la autonomía de sus respectivas instituciones de defensa pública.

Posteriormente, también la Asamblea General, reunida en sesión plenaria en la ciudad de Asunción, Paraguay los días 3, 4 y 5 de junio

de 2014, aprobó la nueva Resolución AG/RES. 2821 (XLIV-O/14), “Hacia la autonomía y fortalecimiento de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”. En uno de los puntos más salientes de la nueva Resolución, la Asamblea General destaca el exitoso trabajo realizado por los Defensores Públicos Interamericanos en la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe “Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a La Justicia y el Estado de Derecho en las Américas” (OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 44; 5 diciembre 2013), resaltó el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia, se refirió a las garantías para su independencia e incluyó como operadores de justicia a los defensores públicos, en tanto se encuentran vinculados a los procesos en los cuales el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso a la justicia (párr. 15). Específicamente, señaló que “las y los defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado” (párr. 18).

En el informe en cuestión, el citado órgano internacional recomendó a los Estados Americanos, entre otras cosas: garantizar la dotación de recursos financieros técnicos y humanos adecuados y suficientes con el fin de asegurar que jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas puedan realizar de manera efectiva sus respectivos roles en el acceso a la justicia; establecer normativamente procesos de selección y nombramiento que tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales; establecer un mecanismo de asignación de casos a través de criterios objetivos; establecer procedimientos previsibles y criterios objetivos para la promoción y ascenso de los y las operadoras de justicia; asegurar en la legislación bases salariales idóneas para las y los operadores de justicia que permitan adoptar remuneraciones suficientes que correspondan a sus responsabilidades; garantizar la existencia de canales de cooperación efectiva entre fiscales, jueces, defensores públicos y la policía, así como otras instituciones que puedan tener en su poder información relevante para los casos, de tal manera que se institucionalice la colaboración, intercambio y acceso de información técnica con el fin de que puedan desempeñar libre y eficientemente sus labores, garantizando el acceso a la justicia de los casos en los que participan. El presente proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación incorpora los estándares alcanzados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y regula las relevantes funciones del organismo como institución de defensa y

protección de derechos humanos; garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos.

De esa manera, se explicita el contenido específico de la garantía orgánica del derecho de defensa y se supera la antigua concepción de la defensa pública como mera asignación de un abogado para actuar en casos determinados.

La institucionalidad de la defensa pública federal reflejada en este proyecto, cumplimenta el deseo del constituyente reformador de 1994 y ofrece un modelo de gestión del servicio público de defensa para efectivizar el acceso a la justicia; señalando a cuáles principios específicos debe ceñir su actuar funcional.

El proyecto regula en detalle las estructuras orgánicas específicas que integran el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Como novedad, además de la previsión con mayor nivel de detalle del ámbito funcional de la Defensoría General de la Nación, órgano jerárquico de control de la eficiencia del servicio de defensa pública, que además establece y ejecuta políticas públicas, y las Defensorías, Tutorías y Curadurías Públicas, se incorpora un Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa, que se integra con magistrados del Ministerio Público de la Defensa, un representante de una Organización no Gubernamental y un representante de un Colegio Público de Abogados.

Con el evidente propósito de favorecer la interacción social con sectores involucrados en la problemática, el Consejo propone vías de acción para favorecer la cobertura del servicio y actúa como órgano de consulta del Defensor General de la Nación. Por otra parte, se incorpora a la estructura del Ministerio Público de la Defensa el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, tal como lo dispusiera la Ley N° 26.657 que lo establece en su ámbito.

Otro aspecto que debe ser resaltado es el referido a los deberes y garantías de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa respecto a los diversos vínculos con los que se relacionan, estableciendo normas particulares que receptan directrices jurisprudenciales y estándares del derecho internacional de derechos humanos. El principio fundamental que rige la gestión de casos de la defensa pública es la asistencia o defensa integral, efectiva y adecuada; y toda instrucción que se dicte debe justificarse en esos lineamientos. Para el cumplimiento de este cometido, los miembros del Ministerio Público de la Defensa gozan de independencia técnica y autonomía funcional, no pudiendo desatender los planteos de sus asistidos o defendidos.

El proyecto delimita las distintas funciones de cada uno de los magistrados que integran el Ministerio Público de la Defensa, integrando las disposiciones normativas locales, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia de organismos internacionales y una profusa reglamentación en el ámbito interno de la Defensoría General de la Nación. Se establecen igualmente instancias de colaboración eficaz como grupos de abordaje territorial para sectores socialmente desaventajados, programas que actúan en relación con la comunidad, y cuerpos técnicos especializados de peritos e investigadores, entre otros.

Es menester señalar que la propuesta también adecúa la organización institucional y de gestión al modelo instaurado por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley N° 27.063, que establece un sistema adversarial de enjuiciamiento, dotando a los defensores públicos de amplias facultades para cristalizar la paridad de armas, en tanto principio rector del nuevo sistema. El cambio de paradigma que genera la ley procesal, en cuanto transforma la manera en la que se lleva adelante la función, necesariamente debe tener su reflejo en la ley que organiza el servicio, que ya no debe estar atada a estructuras estancas que no permiten gestionar adecuadamente la labor, sino que debe ser flexible y de acuerdo a las necesidades de los defendidos. Se establece así el principio de unidad de actuación, instituyendo la figura del Defensor Público de Coordinación.

Por otra parte, el proyecto aquí presentado regula acabadamente el cambio de paradigma ligado al acceso a la justicia por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, jerarquizando y redefiniendo, entre otras cuestiones, el actuar de los actuales curadores y tutores públicos.

En lo referido a los concursos públicos de acceso al cargo de magistrados de la defensa pública y el régimen disciplinario, el proyecto mantiene la línea trazada por la Ley N° 24.946, pero reafirma con necesarios ajustes los resguardos de idoneidad y transparencia, con aspectos no previstos en esa ley. Así, señala que el concurso debe ser convocado en un plazo no mayor a 60 días de producida la vacante; la inclusión de un jurista invitado en el tribunal del concurso; la existencia de requisitos temporales para trasladar definitivamente a un magistrado con su anuencia o para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento y la exigencia de una sentencia con voto de cinco de sus miembros para remover a un magistrado.

Finalmente, se regulan de manera precisa las diversas cuestiones referidas a la gestión económica y financiera del Ministerio Público de la Defensa, que resultan básicas para que la institución pueda llevar adelante sus funciones de acuerdo con la manda constitucional.

La presente propuesta contiene, en definitiva, los reaseguros indispensables para garantizar una defensa pública autónoma que repercute de manera real en el acceso a la justicia y protección judicial, especialmente de los más vulnerables. Es que debe tenerse presente que otra particularidad que sin duda también distingue al modelo federal argentino de defensa pública, es la intervención en todo tipo de materias, fueros e instancias.

Finalmente, no debe olvidarse la relevancia que la Defensa Pública tiene para sectores mayoritarios de la población que acuden a diario a su servicio por la protección de sus derechos.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Rodolfo J. Urtubey.- Pablo G. González.- Marcelo J. Fuentes.- Pedro G. Guastavino.- Sigrid E. Kunath.-

ANEXO

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS	
Defensor Público Oficial de Instancia Única en lo Penal Nacional	54
Secretario de Primera Instancia	54
Prosecretario Administrativo	54
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
Jefe de Despacho	54
Oficial Mayor	54
Oficial	54
Escribiente Auxiliar	54
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES	
Medio Oficial	54

Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS	
Defensor Público Oficial de Instancia Única en lo Penal de Menores	6
Secretario de Primera Instancia	6
Prosecretario Administrativo	6
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
Jefe de Despacho	6
Oficial Mayor	6
Oficial	6
Escribiente Auxiliar	6
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA	
Medio Oficial	6

Defensoría Pública Oficial de Instancia Única de la Ejecución de la Pena

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS	
Defensor Público Oficial de Instancia Única de la Ejecución de la Pena	3
Secretario de Primera Instancia	3
Prosecretario Administrativo	3
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
Jefe de Despacho	3
Oficial Mayor	3
Oficial	3
Escribiente Auxiliar	3
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA	
Medio Oficial	3

CREACIÓN DE CARGOS EN EL FUERO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y DEL INTERIOR DEL PAÍS

Defensorías Públicas Oficial Federales de Primera Instancia con Competencia Penal

FUNCIONARIOS	
Secretario Letrado de Defensoría de Primera Instancia	198
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
Escribiente	198
CUERPO DE RELADORES	
Prosecretario Administrativo Relator	198
Jefe de Despacho Relator	99

Defensorías Públicas Oficiales Nacionales de Primera Instancia en materia penal

FUNCIONARIOS	
Secretario Letrado de Defensoría de Primera Instancia	60
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
Escribiente	60
CUERPO DE RELADORES	
Prosecretario Administrativo Relator	60
Jefe de Despacho Relator	30

Rodolfo J. Urtubey.- Pablo G. González.- Marcelo J. Fuentes.- Pedro G. Guastavino.- Sigrid E. Kunath.-